

La Transición fue posible, pero no perfecta

The Transition was Possible, but not Perfect

María Teresa Ortega López

Universidad de Granada

¿Qué relevancia consideras que tuvo el protagonismo de Franco en los últimos años de la dictadura y qué importancia cabe atribuir a su muerte en el final del régimen y el comienzo de la Transición?

El protagonismo de Franco en los últimos años de la dictadura fue, desde mi punto de vista, determinante en distintos planos. En el ámbito interno, la centralidad de su figura impidió una verdadera institucionalización del régimen más allá de su persona. A pesar de la designación de Juan Carlos como sucesor en 1969, el sistema siguió articulándose en torno al liderazgo carismático del Caudillo. El asesinato de Luis Carrero Blanco en diciembre de 1973 —elegido por Franco como su principal garante de continuidad— puso de manifiesto la fragilidad del edificio franquista sin el sostén directo del dictador y dejó al régimen sin un heredero político capaz de mantener la cohesión entre sus distintas familias. A ello se sumó el progresivo deterioro físico de Franco, que acentuó la parálisis política y reforzó el recurso a la represión como mecanismo de control, culminando en las cinco últimas ejecuciones de septiembre de 1975.

En el ámbito externo, durante las décadas de 1960 y 1970, España vivió un proceso

de creciente integración económica y cultural en Europa occidental, favorecido por el desarrollismo y los intensos flujos migratorios. Esta modernización social contrastaba cada vez más con el inmovilismo político, abriendo una brecha creciente entre la realidad del país y la rigidez del régimen. Dicho proceso estuvo estrechamente ligado a las políticas impulsadas tras el Plan de Estabilización, cuya aplicación resultó exitosa y fue presentada como un logro directamente asociado a la figura del dictador. Y así se mostró hasta el final de los días del franquismo.

La muerte de Franco en noviembre de 1975 supuso, en consecuencia, el derrumbe del pilar que sostenía el edificio franquista. No significó la desaparición inmediata del régimen —pues sus estructuras y actores siguieron influyendo en la Transición—, pero abrió inevitablemente un proceso de cambio inaplazable. Su ausencia permitió que afloraran tensiones internas en el bloque franquista y que se acelerara la negociación con la oposición, al tiempo que se activaban expectativas sociales de apertura largamente contenidas. Desde el exterior, la desaparición del dictador se contempló como una oportunidad para encauzar en España una transición controlada hacia

formas democráticas homologables al contexto europeo.

¿Qué factores (sociales, económicos, políticos, culturales) crees que resultaron fundamentales en el final del franquismo y en el proceso de cambio posterior? ¿Qué función desempeñaron el movimiento obrero y los demás movimientos sociales? ¿Qué papel tuvo la «cuestión nacional»?

El final del franquismo estuvo marcado por un conjunto de transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales que desbordaron la capacidad del régimen para mantenerse en pie. En el ámbito social, el éxodo rural, el crecimiento acelerado de las ciudades y la expansión del sistema educativo —con una participación femenina cada vez más destacada— configuraron una sociedad mucho más plural y compleja que la surgida de la posguerra. Estas transformaciones impulsaron la aparición de nuevas mentalidades, especialmente entre la juventud y la clase trabajadora, que empezaron a reclamar mayores espacios de libertad y de participación política.

La modernización económica promovida por el desarrollismo de los años sesenta permitió una mayor integración de España en los circuitos europeos, pero también generó tensiones y contradicciones. El aumento de las expectativas sociales, junto con los efectos de la crisis internacional de 1973 —inflación, desempleo y conflictos laborales—, minó la legitimidad de la dictadura y acentuó la conflictividad social. En este contexto, el movimiento obrero desempeñó un papel fundamental. A través de huelgas y movilizaciones, especialmente impulsadas por comunistas y por nuevas organizaciones como Comisiones Obreras (CCOO), articuló reivindicaciones que iban más allá del ámbito laboral, incorporando demandas de libertades políticas. Paralelamente, otros

movimientos sociales —vecinales, estudiantiles, feministas o vinculados al catolicismo de base— contribuyeron a generar un clima de presión constante que erosionaba la estabilidad del régimen.

Las movilizaciones de las clases trabajadoras se concentraron principalmente en las ciudades, donde los antiguos campesinos engrosaron los sectores industrial y de servicios, motores de la economía y de la sociedad en su conjunto. En estos entornos se forjaron demandas por un sistema democrático con derechos sociales, caracterizadas por un pragmatismo alejado de utopías revolucionarias y por una cultura de pacto social compartida tanto por las derechas que renegaban de la dictadura como por las izquierdas que relativizaban la lucha de clases como motor exclusivo de la historia. Estas demandas se plasmaron en iniciativas como la Junta Democrática de España, impulsada por el PCE; la Plataforma de Convergencia Democrática, organizada por la nueva dirección del PSOE; y la Asamblea de Cataluña, cuyo lema «Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia» sintetizaba las aspiraciones democráticas y autonómicas.

La llamada «cuestión nacional» adquirió un papel central en la recta final del franquismo, constituyendo uno de los factores que más tensionaron la estabilidad del régimen. El resurgir de los nacionalismos en Cataluña, el País Vasco y Galicia no solo cuestionaba el rígido centralismo franquista, sino que también planteaba la necesidad de repensar el modelo de Estado para reconocer la diversidad cultural, lingüística y territorial de España. En Cataluña, el movimiento cultural y político, a través de partidos, asociaciones y plataformas ciudadanas, reivindicaba la autonomía política y la recuperación de derechos históricos, consolidando una movilización social constante y visible. En el País Vasco, esta dinámica se combinó con la violencia de ETA, que bus-



Reunión de la Asociación Democrática en Mujer en 1979 (Archivo de la Transición).

caba mediante la lucha armada la independencia de Euskadi y que, pese a su carácter minoritario, impactó de manera decisiva en la percepción de la seguridad y en la política de represión del régimen.

La presión ejercida por estas demandas nacionalistas actuó como un catalizador que aceleró la crisis del franquismo. Mostró la incapacidad del Estado centralizado para canalizar las aspiraciones regionales y puso de manifiesto la necesidad de negociar un marco político más flexible y descentralizado. Esta tensión contribuyó a que la transición hacia la democracia no fuera solo un proceso de cambio político formal, sino también un reajuste del propio modelo de Estado, en el que las autonomías y la pluralidad cultural debían ser reconocidas para garantizar la estabilidad futura. En este sentido, la «cuestión nacional» no solo representaba un desafío al franquismo, sino que se convirtió en un factor determinante para la configuración del nuevo orden democrático español.

¿Consideras que la salida que resultó triunfante en el proceso de cambio postdictatorial era la única posible o existían factores que hubieran podido conducir a otras alternativas?

La salida que terminó imponiéndose en España tras la dictadura franquista fue la vía reformista pactada, que desembocó en la instauración de una monarquía parlamentaria y en un sistema democrático homologable al de las democracias liberales europeas. Ahora bien, esta opción no era la única posible, aunque sí la más viable dadas las circunstancias históricas.

Por un lado, la correlación de fuerzas jugó un papel decisivo: el aparato del Estado franquista seguía intacto y la oposición, tras años de represión, se encontraba debilitada y fragmentada. A ello se sumaba el miedo al conflicto, muy presente en una sociedad que todavía conservaba el recuerdo vivo de la Guerra Civil y que veía en la negociación la mejor manera de evitar un

nuevo enfrentamiento. Igualmente, la presión internacional resultaba determinante: la integración en la Comunidad Económica Europea y en la OTAN exigía un sistema democrático homologado, lo que reforzaba la apuesta por un cambio pactado.

Sin embargo, también existían otras alternativas. Una de ellas era la ruptura democrática radical, defendida por sectores de la oposición que reclamaban una depuración profunda de las estructuras franquistas y la construcción de una república. Otra posibilidad era la continuidad autoritaria con reformas limitadas, sostenida por parte del franquismo inmovilista, que buscaba mantener una dictadura «abierta» con cambios cosméticos. Finalmente, no puede olvidarse la vía insurreccional o militar, que cristalizó en amenazas golpistas y en el intento fallido del 23 de febrero de 1981.

Son cuestiones que siempre debemos tener en cuenta a la hora de analizar el final de la dictadura y el proceso de cambio político. Aunque la transición pactada no fue la única opción sobre la mesa, sí fue la salida que contó con más apoyos internos y externos y la que mejor garantizó una evolución hacia la democracia sin desencadenar un conflicto violento. La propia dinámica del franquismo evidenciaba las dificultades de una ruptura: en 1964, el régimen celebró con extraordinaria ostentación los «25 años de paz», demostrando su fortaleza y la ausencia de una oposición con fuerza suficiente para derrocar a Franco o reformar desde dentro sus estructuras. En este contexto, Santiago Carrillo, líder del PCE —la organización política clandestina mejor estructurada en la oposición—, planteó ya en 1965, con su libro significativamente titulado *¿Después de Franco, qué?*, que la única perspectiva realista pasaba por esperar la desaparición del dictador y preparar una «transición pacífica de la dictadura a la democracia». Para ello defendía un proceso de «reconciliación

nacional», en el que se apoyaría a cualquier gobierno dispuesto a aprobar una amnistía total y a convocar elecciones libres con carácter constituyente.

Ahora bien, esto no significa que se tratara de una vía perfecta ni que dentro de los límites existentes no pudieran haberse planteado las cosas de otra manera atendiendo al debate político y a la realidad social del momento.

¿Cómo juzgas la memoria en torno a la Transición y a qué tiene asociada esa etapa la ciudadanía? ¿Qué mitos perviven en torno al proceso?

Como es bien sabido, porque ha sido objeto de debate en muchas ocasiones, la memoria en torno a la Transición española ha estado marcada durante décadas por una visión hegemónica que la presentaba como un proceso ejemplar, pacífico y consensuado, capaz de conducir al país desde una dictadura a una democracia moderna sin sobresaltos. Esa narrativa oficial, reforzada desde las instituciones y gran parte de los medios de comunicación, contribuyó a instalar en la ciudadanía una percepción asociada a la estabilidad, la reconciliación y la superación definitiva de la Guerra Civil. En la cultura política popular, la Transición quedó ligada a la imagen de la concordia, al valor del pacto entre las élites y a la idea de que fue el único camino posible para garantizar la democracia. En este relato, la figura del rey Juan Carlos I y la monarquía ocuparon un lugar central: el monarca fue presentado como garante del cambio democrático y como símbolo de unidad nacional, especialmente tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Sin embargo, esta memoria ha sido objeto de revisión crítica, especialmente a partir de los años noventa y del auge de los movimientos por la memoria históri-

ca. Desde estas perspectivas se señala que la Transición no fue un proceso neutral ni plenamente inclusivo, sino que estuvo condicionado por la continuidad de muchas estructuras franquistas y por la exclusión de voces y demandas que quedaron marginadas. La monarquía, lejos de ser una creación democrática, fue una institución heredada directamente del franquismo, legitimada en la Transición a través de un relato que exaltaba el papel personal del rey y ocultaba las limitaciones de un modelo impuesto desde arriba.

En cuanto a los mitos que aún perviven sobre la Transición, pueden identificarse varios de especial relevancia. Uno de los más difundidos es la idea de que se trató de un proceso modélico, ejemplar y sin sobresaltos en comparación con otras democratizaciones, lo que ha contribuido a presentarlo como un modelo de éxito indiscutible. Sin embargo, esta visión simplifica la complejidad de aquellos años y oculta los conflictos internos, las tensiones sociales y las decisiones estratégicas que marcaron los límites de la democracia incipiente. Otro mito importante es el del consenso generalizado: se ha transmitido la idea de que toda la sociedad aceptó de manera uniforme la vía pactada, cuando en realidad el proceso estuvo atravesado por renunciaciones, desigualdades de poder y negociaciones asimétricas entre las élites políticas, mientras amplios sectores sociales debieron movilizarse activamente para impulsar cambios concretos.

La percepción de unanimidad también invisibiliza el papel de las huelgas, manifestaciones y resistencias políticas que fueron decisivas para presionar al régimen y abrir espacios de libertad. Del mismo modo, persiste la creencia de que la Transición estuvo exenta de violencia; aunque el relato oficial la minimizó, durante esos años se registraron episodios significativos de represión policial, violencia política y

terrorismo de Estado, que recuerdan que la democratización no fue un proceso pacífico y lineal. Por último, la monarquía sigue asociada en la memoria popular al mito del rey «salvador de la democracia», una imagen construida en torno a Juan Carlos I que enfatiza su papel en la defensa del régimen democrático frente al golpe de Estado del 23-F. No obstante, este mito ha comenzado a ser cuestionado en las últimas décadas, tanto por investigaciones históricas como por la propia evolución política y mediática de la institución, que han revelado los límites y ambigüedades de su actuación durante la Transición.

La memoria de la Transición sigue siendo, pues, un terreno en disputa y de debate. Mientras una parte de la ciudadanía la sigue asociando a la estabilidad, al pacto y al papel providencial del rey, otras lecturas críticas resaltan las limitaciones del proceso, los pactos de silencio y los déficits de justicia y participación que acompañaron al nacimiento de la democracia. Así lo podemos comprobar hoy en día.

¿Crees que debería procurarse introducir una visión más compleja de esos años en el currículum docente preuniversitario?

Sí, considero necesario introducir una visión más compleja de la Transición en el currículum docente preuniversitario. La enseñanza de este periodo suele estar muy marcada, como se ha indicado antes, por el relato hegemónico de la «Transición modélica», que simplifica los hechos, silencia los conflictos y presenta la democracia como un logro pacífico y casi inevitable. Este enfoque transmite, como también se ha señalado, una versión edulcorada de la historia, centrada en las élites políticas y en la figura del rey, mientras deja en segundo plano a los movimientos sociales, las luchas obreras, vecinales y feministas, así como la violen-

cia política y la continuidad de estructuras franquistas. En particular, la memoria de la Transición ha invisibilizado de manera sistemática la presencia y las demandas de las mujeres, el movimiento feminista emergente y las cuestiones de igualdad de género, lo que ha consolidado un déficit feminista que aún sigue siendo una asignatura pendiente en la historiografía y en la educación.

Una visión más compleja permitiría al alumnado comprender que la democracia no fue un regalo desde arriba, sino el resultado de presiones, movilizaciones y negociaciones desiguales. También ayudaría a cuestionar mitos persistentes —como los ya mencionados— y a reconocer tanto los logros como las limitaciones del proceso.

Además, abordar los silencios de la Transición, incluyendo la marginación de las mujeres y la falta de reconocimiento del activismo feminista, así como la ausencia de justicia para las víctimas del franquismo o el peso de la amnesia oficial, es clave para fomentar una ciudadanía crítica y consciente de que la democracia es siempre un proyecto inacabado.

No se trata, en definitiva, de renegar del proceso de la Transición, sino de estudiarlo con una mirada más plural, que incluya diferentes voces, experiencias y conflictos de género. Solo así se podrá transmitir a las nuevas generaciones una comprensión más honesta, completa y rica de la historia reciente de España.